

ACTA 2

El 19 de noviembre de 2024, el Tribunal Arbitral Convocado para dirimir las controversias surgidas entre **V1501 S.A.S.** como Parte Convocante, y **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.** y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO V1501**, representado por su vocera **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.**, como Parte Convocada, integrado por los doctores, **DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO**, Presidente, **GONZALO MÉNDEZ MORALES** y **JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ**, Árbitros, y **ANDREA ATUESTA ORTIZ**, Secretaria, realizó por medios virtuales la presente sesión con el fin de continuar el trámite del proceso arbitral. (Rad. 152220)

Se deja constancia de lo siguiente:

La audiencia se realizó sin presencia de las partes, como autoriza el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012.¹

Vencido el plazo legal para que las partes presentaran observaciones sobre la designación de la secretaria, no se recibió comentario alguno sobre el particular, razón por la cual se procede a posesionar a la doctora Andrea Atuesta Ortiz de su cargo, quien se identificó con la cédula de ciudadanía No. 52.451.905 de Bogotá y Tarjeta Profesional No. 118.359 del Consejo Superior de la Judicatura. El Presidente del Tribunal le informó a la secretaria de las funciones que le corresponden y de la responsabilidad que el cargo le impone; la secretaria prestó juramento de cumplir bien y lealmente sus funciones.

A continuación, la secretaria rindió el siguiente informe:

El pasado 8 de noviembre, la Convocante remitió por correo electrónico la demanda subsanada integrada. El mensaje de correo electrónico remisorio del citado escrito fue enviado con copia a la parte convocada.

Fin del informe.

¹ El «tribunal en pleno realizará las audiencias que considere necesarias, con o sin participación de las partes. Las audiencias podrán realizarse por cualquier sistema que permita la comunicación de los participantes entre sí».

En atención al informe secretarial, el Tribunal profirió el siguiente

AUTO 3

19 de noviembre de 2024

Presentada oportunamente la subsanación de la demanda, procede el Tribunal a pronunciarse sobre su admisión, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Examinada la subsanación de la demanda presentada, encuentra el Tribunal que se han subsanado los defectos a los que se hizo referencia en el Auto 2 y esta cumple con los requisitos desarrollados en el artículo 82 del Código General del Proceso (“**CGP**”) de forma que dan lugar a su admisión. En consecuencia, el Tribunal procederá a admitir la demanda en los términos en que fue subsanada.
2. Los asuntos subsanados son, a saber: i) *La cuantía del proceso (numeral 9); y, ii) el lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales (numeral 10).*

Sobre el primer punto, el Convocante determinó que, bajo el artículo 26 del CGP, la cuantía del proceso se determina con base en el avalúo catastral del inmueble para el caso, asciende a catorce mil quinientos cuarenta y siete millones ciento cuarenta mil millones de pesos (COP \$14.547.140.000).

Respecto del segundo punto, en el acápite de notificaciones, si bien se incluyó tanto el correo electrónico, como el físico y el lugar de la sociedad y de los apoderados, el Convocante omitió incluir la dirección física del representante del Convocado. Sin embargo, este Tribunal considera que dicha inobservancia no es sustancial en la admisión de la presente demanda.

3. Junto con la demanda, la Convocante allegó un escrito del siguiente tenor:

“LUIS ERNESTO CHAVES MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.970.828 de Pasto, actuando como representante legal de la sociedad demandante V1501 S.A.S., con domicilio en la ciudad de Pasto, NIT 900.835.788-3, por el presente manifiesto bajo la gravedad de juramento que la sociedad demandante no se haya en capacidad de atender los gastos del proceso sin menos cabo de lo necesario para su subsistencia, situación que resulta evidente por la cuantía del asunto y la caución que ella implicaría teniendo en cuenta que en la demanda se solicitan medidas cautelares, así como por la expectativa de demanda ejecutiva en contra de la sociedad por la obligación a su cargo y que hasta el momento no ha podido cumplir a favor de banco Davivienda, hecho que también se menciona en el escrito de demanda.

Debido a lo anterior solicito que, conforme a los artículos 151 y s.s. del Código General del Proceso, se conceda el amparo de pobreza a favor de la sociedad V1501 S.A.S.”

4. En relación con la solicitud de amparo de pobreza presentada por la Convocante², el Tribunal encuentra que no se reúnen los presupuestos para que sea concedido el amparo solicitado, pues no se ha acreditado que la sociedad Convocante se encuentre en una situación de extrema gravedad financiera.

Si bien la jurisprudencia ha establecido que el amparo de pobreza también podría resultar aplicable en el caso de las personas jurídicas, su procedencia es excepcional y debe encontrarse acreditada la criticidad de la situación financiera en la que se encuentra la sociedad. Como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia, “[p]or excepción, la jurisprudencia ha admitido que el amparo de pobreza abraza a las personas morales, siempre que «se encuentren en una crítica situación financiera tal que, por padecerla, verdaderamente no se hallan en condiciones de atender a los gastos de un proceso, sin dejar en vilo su pervivencia o sin precipitar su definitiva extinción en forma estruendosa desde el punto de vista económico» (AC166, 1 ag. 2003, exp. n° 00045)”³.

Añade la Corte Suprema de Justicia:

² Advierte el Tribunal que el escrito aportado por la Convocante no está firmado.

³ Corte Suprema de Justicia. Auto del 24 de abril de 2017. AC2515-2017. Radicación n° 11001-31-03-017-2015-00427-01.

*“En este caso, **el peticionario tiene una mayor carga argumentativa y demostrativa, pues deberá evidenciar que el ente empresarial padece serias dificultades de capital, al punto que, de sufragar las expensas connaturales a la causal, lo llevará a la disolución y liquidación, o a la imposibilidad de atender las «necesidades inherentes a su existencia misma, como en efecto acontece, entre otros conceptos, con las cargas laborales, locativas y los importes sociales, cuyos montos pueden afectar inclusive a las personas naturales que la integran» (idem).***

De allí que esta Corte haya considerado razonable la negativa al amparo de pobreza, cuando el interesado omita arrimar las pruebas que permitan demostrar la difícil situación patrimonial de la sociedad, bajo la premisa que su procedencia resulta extraordinaria (STC558, 25 en. 2017, rad. n° 2017-00014-00).

Tal análisis deberá hacerse caso por caso, «perfilando un símil entre la subsistencia que atañe con la persona humana, y la permanencia de las personas jurídicas, bien para superar o evitar en su caso la extinción definitiva de acuerdo con la función social que cumplen, o bien para disminuir los efectos que de su extinción puedan derivarse» (AC166, 1 ag. 2003, exp. n° 00045).”⁴ (Resalta el Tribunal)

En el mismo sentido el Consejo de Estado ha establecido:

*“El amparo de pobreza es una figura del ordenamiento procesal civil regulada en los artículos 160 a 167 del C.P.C y que resulta aplicable en materia de lo contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del C.C.A. Con dicha figura se busca garantizar no sólo la igualdad real entre las partes, sino el derecho de acceso a la administración de justicia de las personas que no cuentan con los recursos necesarios para asumir los gastos que surgen en el trámite de un proceso judicial. El artículo 160 del C.P.C. establece que **se concederá amparo de pobreza a la persona que no se encuentre en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia existencia** y la de las personas a las que, por ley, debe alimentos. Una lectura inicial de tal artículo llevaría a concluir que el beneficio del amparo de pobreza está previsto únicamente para las personas naturales. No obstante, **esta Sala ha admitido la procedencia del amparo de pobreza para las personas jurídicas, cuya situación económica les impida cumplir con las cargas procesales de tipo económico. Esas dificultades económicas, en todo caso, deben ser graves al punto que, de cumplirse la carga procesal pecuniaria, se afectaría o se pondría en grave riesgo la sostenibilidad financiera de la empresa. Esto es, los simples apuros económicos no son per se razón suficiente para conceder el beneficio del amparo de pobreza a las personas jurídicas, pues sólo las situaciones de extrema gravedad económica debidamente acreditadas hacen procedente dicho beneficio a favor de las personas jurídicas. De ahí que a la persona jurídica le corresponda probar, por medio de los estados financieros actualizados, que se encuentra en***

⁴ Corte Suprema de Justicia. Auto del 24 de abril de 2017. AC2515-2017. Radicación n° 11001-31-03-017-2015-00427-01.

***una crítica situación económica** y que, por ende, no puede cumplir con las cargas procesales pecuniarias, porque se vería afectada de manera grave la sostenibilidad financiera de la compañía. Al juez, por su parte, le compete examinar las pruebas con las que se pretenda demostrar la difícil condición económica de la empresa y determinar si existe una situación de extrema necesidad, que le impida a la persona jurídica cumplir con las cargas procesales monetarias.*⁵ (Resalta el Tribunal)

El representante legal de la Convocante fundamenta su petición en que “*la cuantía del asunto y la caución que ella implicaría teniendo en cuenta que en la demanda se solicitan medidas cautelares, así como por la expectativa de demanda ejecutiva en contra de la sociedad por la obligación a su cargo y que hasta el momento no ha podido cumplir a favor de banco Davivienda*”. Estas manifestaciones no acreditan de forma objetiva la falta de capacidad financiera de la sociedad para atender los gastos del proceso y, mucho menos, que la atención de estos pondría en vilo su supervivencia. La cuantía del asunto y la caución a otorgarse ante la solicitud de una medida cautelar, no constituyen circunstancias objetivas que demuestren la falta de capacidad financiera de la sociedad, y mucho menos que está en riesgo la sostenibilidad financiera de la misma. En el mismo sentido, la expectativa de una posible demanda ejecutiva tampoco acredita que la sociedad se encuentre en una situación de extrema gravedad financiera que amenace su permanencia.

Al respecto, la Corte Constitucional, en Sentencia T-339 de 2018, estipuló los presupuestos mínimos para determinar la procedencia del amparo de pobreza, los cuales están consagrados en los artículos 151 y subsiguiente del CGP

*“En primer lugar, debe presentarse la solicitud de amparo de pobreza de manera personal, afirmando bajo juramento que está en las condiciones previstas en el artículo 151 del Código General del Proceso. En otras palabras, la persona interesada debe presentar una petición formal y juramentada ante el juez competente.
(...)”*

*En segundo término, este beneficio no puede otorgarse a todas las personas que de manera indiscriminada lo soliciten, sino **únicamente** a aquellas que reúnan objetivamente las condiciones para su reconocimiento, a saber, que **soliciten de forma... motivada** el amparo, y **acrediten** la situación socioeconómica que lo hace procedente.
(...)”*

⁵ Consejo De Estado. C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenás. 5 de mayo de 2011. Radicación número: 05001-23-31-000-2006-02221-01(18169).

*Esta circunstancia fue particularmente analizada en la Sentencia T-114 de 2007, momento en el cual la Corte conoció una acción de tutela en donde se alegaba la vulneración de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia porque el juez ordinario decidió denegar el amparo de pobreza. En dicho fallo se negó el recurso de amparo al estimar que la decisión judicial adoptada por el fallador, en el sentido de no conceder la institución procesal, no configuraba una vulneración de tales derechos fundamentales, pues objetivamente no se advertía que las accionantes estuvieran en las condiciones previstas en el Estatuto Procesal de la época. **Para llegar a esa conclusión, el Tribunal dejó claro que no siempre bastaba con la declaración juramentada de estar en una situación económica precaria, sino que el juez competente, al momento de examinar la procedencia de esta figura, debía contar con un ‘parámetro objetivo’ para determinar si, conforme con la situación fáctica presentada, dicha otorgamiento tenía una justificación válida.***

*Ahora, habiendo quedado claro que esta institución procesal tiene fundamento constitucional y que la misma **requiere para su procedencia la demostración de ciertos presupuestos fácticos, es conveniente precisar** –para responder el problema jurídico planteado- los efectos del reconocimiento del amparo de pobreza, en especial, respecto de la prueba decretada de forma oficiosa. (negrilla y subrayado fuera del texto original)*

Destaca el Tribunal que no se ha allegado prueba alguna que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento de un amparo de pobreza.

Por lo expuesto, el Tribunal

RESUELVE

1. Tener por subsanados oportunamente los defectos advertidos por el Tribunal en relación con el escrito de demanda presentado.
2. Sin perjuicio de lo que se decida sobre su competencia, por reunir los requisitos establecidos en la ley, admitir la demanda presentada por **V1501 S.A.S.** contra **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.** y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO V1501**, representado por su vocera **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.**
3. En los términos del artículo 2.35 del Reglamento de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, correr traslado a la Parte Convocada de la demanda subsanada, por el término de veinte (20) días hábiles.

4. Disponer la notificación personal de la presente providencia a **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.** y al **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO V1501**, representado por su vocera **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022.
5. Negar la solicitud de amparo de pobreza formulada por la sociedad Convocante.
6. Por Secretaría notifíquese esta providencia.

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión.

Aprobada por medios virtuales

DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO

Presidente

Aprobada por medios virtuales

GONZALO MÉNDEZ MORALES


Árbitro

Aprobada por medios virtuales

JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ

Árbitro

La suscrita Secretaria del Tribunal Arbitral deja constancia que los Árbitros intervinieron en la audiencia, deliberaron y aprobaron las decisiones que esta Acta contiene, a través de los medios electrónicos autorizados por el artículo 2.13 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y 23 de la Ley 1563 de 2012.



ANDREA ATUESTA ORTIZ

Secretaria

ACTA 1
MEDIDAS CAUTELARES

El 26 de diciembre de 2024, el Tribunal Arbitral Convocado para dirimir las controversias surgidas entre **V1501 S.A.S.** como Parte Convocante, y **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.** y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO V1501**, representado por su vocera **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.**, como Parte Convocada, integrado por los doctores, **DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO**, Presidente, **GONZALO MÉNDEZ MORALES** y **JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ**, Árbitros, y **ANDREA ATUESTA ORTIZ**, Secretaria, realizó por medios virtuales la presente sesión con el fin de continuar el trámite del proceso arbitral. (Rad. 152220)

Se deja constancia de lo siguiente:

El Tribunal profirió el siguiente

AUTO 1

26 de diciembre de 2024

Procede el Tribunal a pronunciarse sobre la medida cautelar solicitada por la Parte Convocante en la demanda arbitral, para lo cual considera lo siguiente:

1. La Parte Convocante solicita: *“Decretar la inscripción de la demanda a los folios de matrícula inmobiliaria 240-290482 LOCAL ESPECIALIZADO HOTEL”.*
2. En relación con la solicitud de medidas cautelares, el artículo 2.51 del Reglamento de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá establece lo siguiente: *“la solicitud, práctica y trámite de las medidas cautelares se hará de conformidad con el Estatuto Arbitral y demás normas que rigen la materia”.*
3. El artículo 32 de la Ley 1563 de 2012 determina que en el trámite arbitral pueden ordenarse las medidas cautelares que serían procedentes en la jurisdicción ordinaria, cuyo decreto, práctica y levantamiento se somete a las normas del Código General del Proceso.
4. El artículo 590 del Código General del Proceso, en relación con la medida cautelar de inscripción de la demanda, indica:

*“**Artículo 590.** Medidas cautelares en procesos declarativos. En los procesos declarativos se aplicarán las siguientes reglas para la solicitud, decreto,*

práctica, modificación, sustitución o revocatoria de las medidas cautelares:

1. Desde la presentación de la demanda, a petición del demandante, el juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

a) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro y el secuestro de los demás cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes.

(...)

b) La inscripción de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persiga el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual. Si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de este el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de la demanda, y de los que se denuncien como de propiedad del demandado, en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.

El demandado podrá impedir la práctica de las medidas cautelares a que se refiere este literal o solicitar que se levanten, si presta caución por el valor de las pretensiones para garantizar el cumplimiento de la eventual sentencia favorable al demandante o la indemnización de los perjuicios por la imposibilidad de cumplirla. También podrá solicitar que se sustituyan por otras cautelas que ofrezcan suficiente seguridad.

(...)

2. Para que sea decretada cualquiera de las anteriores medidas cautelares, el demandante deberá prestar caución equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de las pretensiones estimadas en la demanda, para responder por las costas y perjuicios derivados de su práctica. Sin embargo, el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable, o fijar uno superior al momento de decretar la medida. No será necesario prestar caución para la práctica de embargos y secuestros después de la sentencia favorable de primera instancia. (...)"

5. En estos términos, la norma determina que en los procesos declarativos, como es el que ocupa a este Tribunal, es procedente la medida de inscripción de la demanda *"sobre bienes sujetos a registro (...) cuando la demanda verse sobre dominio u otro derecho real principal, directamente o como consecuencia de una pretensión distinta o en subsidio de otra, o sobre una universalidad de bienes"*.
6. Examinada la medida cautelar solicitada por la demandante, el Tribunal encuentra que esta se enmarca en los supuestos previstos en el literal (a) del numeral primero del artículo 590 del Código General del Proceso (en adelante **"C.G.P"**). En efecto, en la pretensión segunda se pide **"ORDENAR a la sociedad Fiduciaria Davivienda S.A.**

en nombre propio y como Vocera del Fideicomiso V1501, que restituya a la Fideicomitente la Unidad Privada Especial donde opera el hotel incluido en el proyecto constructivo, concretamente, la unidad especial o área del hotel, identificada con el folio de matrícula inmobiliaria No. 240-290482 LOCAL ESPECIALIZADO HOTEL.”

7. En consecuencia encuentra el Tribunal que la medida cautelar solicitada de inscripción de esta demanda en el folio de matrícula inmobiliaria 240-290482 LOCAL ESPECIALIZADO HOTEL es procedente.
8. Previo al decreto de esta medida cautelar, la Parte Convocante deberá prestar caución, tal y como lo establece en el numeral segundo del artículo 590 del C.G.P. Considerando que la norma permite que el juez aumente o disminuya el monto de la caución cuando lo considere razonable, teniendo en cuenta la naturaleza de la medida cautelar objeto de análisis, sus fines, sus potenciales efectos, y su función de publicidad, la caución se fijará en la suma de \$150.000.000.

En consecuencia, el Tribunal

RESUELVE

1. Previo al decreto de la medida cautelar de inscripción de la demanda solicitada por la Parte Convocante, ordenar a la demandante, prestar la correspondiente caución a órdenes de este Tribunal y para este proceso por la suma de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS (\$150.000.000). Para el efecto se le concede un término de diez (10) días hábiles.
2. Por Secretaría notifíquese esta providencia a la Parte Convocante en los términos del artículo 2.5 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión.

Aprobada por medios virtuales

DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO

Presidente

Aprobada por medios virtuales

GONZALO MÉNDEZ MORALES

Árbitro

Aprobada por medios virtuales

JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ

Árbitro

La suscrita Secretaria del Tribunal Arbitral deja constancia que los Árbitros intervinieron en la audiencia, deliberaron y aprobaron las decisiones que esta Acta contiene, a través de los medios electrónicos autorizados por el artículo 2.13 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y 23 de la Ley 1563 de 2012.

ANDREA ATUESTA ORTIZ

Secretaria

Señores

CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

Ciudad.

Ref.: Demanda Arbitral de Sociedad V1501 SAS vs FIDUCIARIA DAVIVIENDA Y OTROS

Radicado: 152220

Dentro del trámite de la referencia el Tribunal a través de auto No. 3 de fecha 19 de noviembre de 2024, negó el amparo de pobreza a la sociedad demandante. Razón por la cual se anexa al presente escrito la decisión de la superintendencia de sociedades que admite a la sociedad demandante a trámite de Insolvencia y está acreditado en el proceso que dentro de las obligaciones admitidos insolvencia está la cobrada por el banco Davivienda quien también es parte en el presente proceso. Con la prueba suministrada se cumple la exigencia que permite a las personas jurídicas acceder al trámite al beneficio negado.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos comedidamente el decreto de medidas cautelares, correspondientes a la inscripción de la demanda la inscripción de la demanda a los folios de matrícula inmobiliaria 240-290482 LOCAL ESPECIALIZADO HOTEL.

Anexo a este escrito auto de la Superintendencia de Sociedades que admite a la demandante a trámite de solvencia y amparo de pobreza.

Atentamente,

IVAN FERNANDO ZARAMA CONCHA

T.P 50.358 CSJ



Tipo: Salida
Trámite: 0 - ADMISION, RECHAZO O REVOCATORIA (INCLUYE ART. 19 N. 5 LEY 1116)
Sociedad: 900835788 - V1501 SAS
Remitente: 620 - INTENDENCIA REGIONAL DE CALI(((9588427)))
Destino: 900835788 V1501 SAS
Folios: 11
Tipo Documental: AUTO
Fecha: 2023-02-15 12:32:05
TRV-171.1_18371
Anexo: NO
No. Radicado: 2023-03-001042

AUTO

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
INTENDENCIA REGIONAL CALI**

SUJETO DEL PROCESO
V1501 SAS

PROMOTOR
LUIS ERNESTO CHAVES MARTINEZ
(Representante Legal con funciones de Promotor)

PROCESO
REORGANIZACIÓN

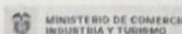
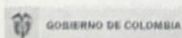
ASUNTO
POR EL CUAL SE ADMITE UNA SOLICITUD AL PROCESO DE REORGANIZACIÓN

No. DE PROCESO
2022-INS-1434

I. ANTECEDENTES

1. Con memorial 2022-01-847495 de fecha 30 de noviembre de 2022, el señor Luis Ernesto Chaves Martínez, identificado con el número de cedula 12.970.828, solicitó la admisión de la sociedad V1501 S.A.S., con NIT. 900.835.788-3, y domicilio en la ciudad de Pasto, Nariño, al proceso de Reorganización, en los términos de la Ley 1116 de 2006.
2. Mediante oficio 2022-03-011221 de fecha 5 de diciembre de 2022, este Despacho requirió al solicitante a fin de que allegara la información faltante, otorgándole para tal efecto un plazo de diez (10) días hábiles desde el día siguiente al recibo del mismo. Dicho requerimiento fue remitido a la dirección registrada en la solicitud de admisión y entregado el día 7 de ese mes y año.
3. Con memorial 2023-01-014124 de fecha 13 de enero de 2023, la sociedad deudora presentó la respuesta al requerimiento mencionado en el numeral anterior.

Cabe advertir que, mediante la Resolución 2022-01-785427 del 2 de noviembre de 2022, se ordenó la suspensión de términos en todos los procesos jurisdiccionales que se adelantan ante la sede de Bogotá y ante las Intendencias Regionales de la Superintendencia de Sociedades, entre los días 20 de diciembre de 2022 y el 10 de enero de 2023, inclusive.



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10
Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia



En ese orden de ideas, para el caso que no ocupa, el término de los diez (10) días fijado en el oficio 2022-03-014124, de fecha 5 de diciembre 2022, empezó a correr el 9 de ese mes y año, que, por efectos de la suspensión de términos, vencía el 13 de enero pasado.

4. Verificados los requisitos formales de admisión a proceso de reorganización, encuentra el Despacho lo siguiente:

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS DE LA SOLICITUD

1. SUJETO AL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA	
FUENTE: ART. 2, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
<p>La deudora, aportó el certificado de existencia y representación legal expedido el 24 de noviembre pasado por la Cámara de Comercio de Pasto, en el cual, consta la inscripción en el registro mercantil, de la sociedad denominada V1501 S.A.S., con domicilio en la ciudad de Pasto, Nariño, en los términos de la Ley 1258 de 2008, por ende, se trata de una sociedad comercial, sujeta al régimen de insolvencia.</p> <p>Consta, en dicho certificado que, el señor Luis Ernesto Chaves Martínez, con cédula de ciudadanía número 12.970.828, es el representante legal, la señora Ana Esther del Rosario Chaves Caicedo, con cédula de ciudadanía número 30.715.325, es la representante legal suplente, la señora Paola Andrea Ramos Ramos, con cédula de ciudadanía número 37.080.101 y TP. 120411-T, es la revisora fiscal, y la señora Isabel Cristina Muñoz Chaves, con cédula de ciudadanía número 30.711.502 y TP- 38.462-T, como revisora fiscal suplente.</p> <p>La sociedad se encuentra ubicada en la Calle 20 No. 33 - 60, Avenida de los Estudiantes, dirección para notificación judicial y comercial, los números telefónicos de contacto son 3184873470 y 3002802880, la dirección electrónica es: contabilidad@hotelv1501.com, para notificación judicial. Pertenece al Grupo 3 bajo NIIF.</p> <p>La sociedad tiene como objeto social principal, el desarrollo de las siguientes actividades a) desarrollar, diseñar, construir y dotar proyectos de infraestructura hotelera y turística; 2) desarrollar, diseñar, construir y comercializar proyectos de unidades inmobiliarias destinadas a consultorios, oficinas, viviendas o similares; c) realizar la prestación de servicios hoteleros directamente o por medio de contratos de mandato, consorcios, uniones temporales, cuentas en participación, asociaciones joint venture, fiducia, copropiedad hotelera y similares;..."</p>	
2. LEGITIMACIÓN	
FUENTE: ART. 11, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
<p>Acreditado en solicitud:</p> <p>Con la radicación número 2022-01-847495, se envió, a través del aplicativo MI, la solicitud de admisión al proceso de reorganización, en los términos de la Ley 1116 de 2006, de la sociedad V1501 SAS, con domicilio en la ciudad de Pasto, Nariño, suscrita por el señor LUIS ERNESTO CHAVES MARTINEZ, identificado con número de documento 12.970.828, en calidad de representante legal, inscrito en el registro mercantil, por ende, es sujeto legitimado para actuar.</p> <p>La sociedad, no presentó el documento, mediante el cual el órgano social competente impartió la autorización pertinente, sin justificación alguna.</p> <p>Con el radicado 2023-01-014124, la deudora presento copia del acta número 07 de fecha 7 de</p>	



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia



noviembre de 2022, en la cual, consta la autorización para acudir al régimen de insolvencia en la modalidad de reorganización.

3. CESACIÓN DE PAGOS

FUENTE: ART. 9.1, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
--	--------------------------------------

Acreditado en solicitud:

La deudora, presentó la certificación suscrita por el representante legal, el contador y la revisora fiscal, en la cual, consta la existencia de más de dos acreencias vencidas por más de noventa (90) días, por valor de \$23.302.303.699, que representan el 54% del pasivo total que suma, \$42.816.438.745, acompañada por la relación de acreencias, firmada por las mismas personas.

4. INCAPACIDAD DE PAGO INMINENTE

FUENTE: ART. 9.2, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: No Aplica
--	---

Acreditado en solicitud:

No aplica

5. NO HABER EXPIRADO EL PLAZO PARA ENERVAR CAUSAL DE DISOLUCIÓN SIN ADOPTAR MEDIDAS

FUENTE: ART. 10.1, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
---	--------------------------------------

Acreditado en solicitud:

La sociedad deudora, no presentó el documento por medio del cual, acredite que se encuentra o no en causal de disolución, volvió a presentar, la certificación en la que consta que lleva contabilidad regular de los negocios.

Al respecto, es preciso que la deudora, para el efecto que nos ocupa, acuda a lo dispuesto en el artículo 4o de la Ley 2096 de 2020.

Con el radicado 2023-01-014124, la deudora aportó la certificación en los términos solicitados, en la cual demuestra que, no se encuentra incurso en causal de disolución

6. CONTABILIDAD REGULAR

FUENTE: ART. 10.2, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
---	--------------------------------------

Acreditado en solicitud:

La deudora, presentó la certificación suscrita por el representante legal, el contador y la revisora fiscal, en la cual, consta que lleva contabilidad regular de los negocios de conformidad con la normatividad vigente.

7. REPORTE DE PASIVOS POR RETENCIONES OBLIGATORIAS CON EL FISCO, DESCUENTOS A TRABAJADORES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

FUENTE: ART. 32, LEY 1429 DE 2010	Estado de cumplimiento: Si
---	--------------------------------------

Acreditado en solicitud:

La sociedad deudora, aportó la certificación suscrita por el representante legal, el contador y la revisora fiscal, en la cual, consta la inexistencia de obligaciones por concepto de retención en la fuente, descuentos efectuados a los trabajadores y aportes al sistema de seguridad social.

8. CÁLCULO ACTUARIAL APROBADO, MESADAS PENSIONALES, BONOS Y TÍTULOS PENSIONALES AL DÍA, EN CASO DE EXISTIR PASIVOS PENSIONALES

FUENTE: ART. 10.3, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
---	--------------------------------------

Acreditado en solicitud:

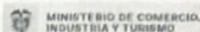
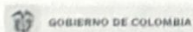
La deudora, para el efecto, diligenció el recuadro del formulario, en el sentido de indicar, que no registra esta clase de operaciones.

9. ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL DE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS

FUENTE: ART. 13.1, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
---	--------------------------------------

Acreditado en solicitud:

Con la solicitud, la sociedad deudora, aportó los estados financieros de propósito general con corte a 31 de diciembre de 2021 comparativo con 2020, 2020 comparativos 2019 y 2019 comparativos 2018, firmados por el representante legal, la contadora y la revisora fiscal, acompañados de las notas a los estados financieros, mas, se omitió el envío de la certificación



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.
www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (001) 2201000

Colombia



suscrita por el representante legal y la contadora, y el dictamen de la revisora fiscal, como lo exige, el nuevo marco normativo previsto en el Decreto 2420 de 2015.

Con el radicado 2023-01-014124, la deudora, aportó la certificación de los estados financieros, acompañados de los dictámenes del revisor fiscal, para cada uno de los periodos, subsanando la observación formulada.

10. ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL CON CORTE AL ÚLTIMO DÍA DEL MES ANTERIOR A LA SOLICITUD

FUENTE: ART. 13.2, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
---	--------------------------------------

Acreditado en solicitud:

La sociedad deudora, presentó los estados financieros de propósito especial, al corte de 30 de octubre de 2022, firmados por el representante legal, el contador y la revisora fiscal, acompañados de las notas a los estados financieros, mas omitió el envío de la certificación suscrita por el representante legal y el contador y el informe de la revisora fiscal.

Con el radicado 2023-01-014124, la deudora aportó la certificación y el informe de la revisora fiscal, subsanando la observación formulada.

11. INVENTARIO DE ACTIVOS Y PASIVOS CON CORTE AL ÚLTIMO DÍA DEL MES ANTERIOR A LA SOLICITUD

FUENTE: ART. 13.3, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
---	--------------------------------------

Acreditado en solicitud:

La deudora, presentó el inventario detallado de activos, al corte de 31 de octubre pasado, firmado por el representante legal, la contadora y la revisora fiscal, en el cual se observó que, el monto total de activos por valor de \$39.878.767.973, coincide con el monto total de activos que, registra el estado de situación financiera, a la misma fecha de corte.

La sociedad deudora, presentó el inventario pormenorizado de pasivos, firmado por el representante legal, la contadora y la revisora fiscal, cuyo valor total de \$42.816,438.745, coincide con el total de pasivos que registra el estado de situación financiera a la misma fecha de corte.

12. MEMORIA EXPLICATIVA DE LAS CAUSAS DE INSOLVENCIA

FUENTE: ART. 13.4, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
---	--------------------------------------

Acreditado en solicitud:

La deudora aportó la memoria explicativa de las causas que llevaron al deudor a la situación de insolvencia.

13. FLUJO DE CAJA

FUENTE: ART. 13.5, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
---	--------------------------------------

Acreditado en solicitud:

La sociedad deudora aportó el flujo de caja para atender las obligaciones sujetas al acuerdo, dentro del cual, se encuentran incluidas para el pago, las obligaciones del acuerdo, que no respetan la prelación de pagos.

Lo anterior, por cuanto, trata para el pago de las acreencias incluidas bajo la expresión, "Demás Acreedores", a las obligaciones con proveedores, (4ª Clase), y las obligaciones quirografarias 5ª Clase), como si fuera una sola, cuando, debe diferenciar una de la otra, dado que, primero se pagan a los proveedores y luego a los quirografarios.

La sociedad deudora, con el radicado 2023-01-014124, aportó el flujo de caja debidamente diligenciado, incluyendo de manera clara, las diferentes clases de acreedores, con lo cual, subsana la observación formulada.

14. PLAN DE NEGOCIOS

FUENTE: ART. 13.6, LEY 1116 DE 2006	Estado de cumplimiento: Si
---	--------------------------------------



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

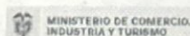
Tel Bogotá: (601) 2201000

Colombia



Acreditado en solicitud:	
La sociedad deudora, si bien, aportó el plan de negocios, éste se limitó a presentar la propuesta de pago, que no es suficiente. Con el radicado 2023-01-014124, la deudora complementó la información requerida, subsanando la observación formulada	
15. PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS DE VOTO	
FUENTE:	Estado de cumplimiento:
ART. 13.7, LEY 1116 DE 2006	Si
La sociedad deudora, presentó el proyecto de calificación y graduación de créditos, en los términos del Título XL del Libro Cuarto del Código Civil y demás normas legales que lo modifiquen y adicionen, en concordancia con el artículo 25 de la ley 1116 de 2006.	
Revisado el proyecto aludido, se observó que, la deudora relaciona acreencias de tercera clase, esto es, con garantía hipotecaria, sin embargo, certificó la inexistencia de esta clase de acreencias.	
La sociedad deudora, aportó el proyecto de asignación de derechos de voto, no obstante, da lugar a formular las siguientes observaciones: i. Omitió incluir la variación del IPC, dato base para obtener el resultado de la indexación; ii. Tampoco registró la fecha de corte, esto es, 31 de octubre de 2022, complementaria de la fecha de vencimiento, para obtener el resultado de la indexación.	
Si bien, en el formulario del Módulo de Insolvencia se indica que el deudor no es garante, avalista o codeudor de terceros, es preciso complementar la información allegando la certificación correspondiente.	
El deudor aportó la certificación suscrita por el contador y la revisora fiscal, donde se evidencia la composición accionaria de la sociedad.	
Con el radicado 2023-01-014124, la deudora aportó el proyecto de calificación y graduación de créditos, así como el proyecto de determinación de derechos de voto, debidamente diligenciados, acompañada de las aclaraciones pertinentes	
De otra parte, la deudora aportó la certificación suscrita por el contador y la revisora fiscal, donde se evidencia la composición accionaria de la sociedad.	
16. REPORTE DE GARANTÍAS REALES EN LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN DE BIENES NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL DEUDOR OBJETO GARANTÍAS LEY 1676	
FUENTE:	Estado de cumplimiento:
ARTS. 50 AL 52 LEY 1676 DE 2013, ART. 2.2.2.4.2.31. DECRETO 1074 DE 2015	Si
Acreditado en solicitud:	
La deudora, al diligenciar el formulario de la solicitud que se resuelve, manifestó no registrar bienes dados en garantía, no obstante, al revisar el proyecto de calificación y graduación de créditos, se advirtió que, en él, se relacionan obligaciones de tercera clase, esto es, con garantía hipotecaria, en consecuencia, además de corregir la información inicialmente allegada, debe aportar la certificación en la que conste la existencia de bienes dados en garantía, indicando, además, la siguiente información: i. Los bienes dados en garantía y el valor; ii. La identificación de los acreedores; iii. Si se encuentra sobre o subgarantizada, respecto del avalúo; iv. Debe aportar el avalúo; v. Si los bienes dados en garantía, son o no necesarios para la actividad que desarrolla la deudora;	
La sociedad deudora con el radicado 2023-01-014124, aportó la certificación suscrita por el representante legal, el contador y el revisor fiscal, en la cual confirman la inexistencia de bienes dados en garantía, con las aclaraciones pertinentes, subsanando la observación formulada.	

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (601) 2201000

Colombia



5. Evaluados los documentos suministrados por la sociedad solicitante, se establece que la solicitud de admisión cumple con los requisitos exigidos por la Ley 1116 de 2006, en los términos en que fue reformada por la Ley 1429 de 2010, para ser admitida al proceso de reorganización.

En mérito de lo expuesto, el **INTENDENTE REGIONAL CALI** de la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**,

RESUELVE

Primero. Admitir a la sociedad V1501 SAS. con NIT. 900.835.788 y domicilio en LA Calle 20 # 33 - 60, de la ciudad de Pasto, Nariño, al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006 y las normas que la complementan o adicionan.

Segundo. Designar como promotor al Representante Legal de la sociedad:

Nombre	LUIS ERNESTO CHAVES MARTINEZ
C.C.	12970828
Contacto	Dirección: Calle 21 # 41-41 Correo electrónico: v1501pasto@gmail.com Teléfono: 3160169405

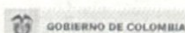
Advertir a representante legal de la sociedad que debe cumplir con las funciones que le corresponden al promotor, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la Ley 1429 de 2010, desde la notificación de la presente providencia, para lo cual no será necesaria su posesión ante el Grupo de Apoyo Judicial de esta Entidad.

En todo caso, en el ejercicio de dicha función, queda sujeto a lo dispuesto en el Manual de Ética expedido a través de la Resolución 100-000083 de 2016, y a los términos establecidos en el Compromiso de Confidencialidad expedido mediante Resolución 100-006746 de 20 de noviembre de 2020, y en general a los deberes establecidos por el artículo 2.2.2.11.3.7 del Decreto 2130 de 2015.

Parágrafo. Advertir al representante legal que ejerza como promotor que, en el evento en que no cumpla satisfactoria y oportunamente con las órdenes impartidas en la providencia de apertura, o en cualquier momento que el juez lo considere adecuado para la buena marcha del proceso, podrá dar por terminada la función en cabeza del representante legal o del deudor en caso de las personas naturales comerciantes y designar a un promotor de la lista de la Superintendencia de Sociedades, conforme al procedimiento previsto en su reglamento.

Tercero. Ordenar al representante legal diligenciar y registrar el formulario de registro de ejecución concursal ordenado en el Decreto 1074 de 2015, artículo 2.2.2.4.2.58 y concordantes, ante CONFECÁMARAS, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto. Ordenar al representante legal fijar el aviso del inicio del proceso de Reorganización elaborado por el Secretaría Administrativa de la Intendencia Regional de Cali, en un lugar visible de su sede principal y sucursales, durante todo el tiempo de



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (601) 2201000

Colombia



duración del proceso.

Quinto. Ordenar al deudor que dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de esta providencia, presente una actualización del inventario de activos y pasivos incluyendo las acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y la fecha del día anterior del presente auto, soportados en un estado de situación financiera, un estado de resultado integral y notas a los estados financieros a la mencionada fecha, las cuales deberán tener especial énfasis de elaboración conforme lo dispuesto en el Decreto 2420 de 14 de diciembre de 2015 para cada uno de los Grupos de Preparadores de Información Financiera, en el respectivo anexo.

Estos deberán ser suscritos por representante legal, contador y revisor fiscal en caso de estar obligado a tenerlo legal o estatutariamente. En la actualización del inventario y en el plazo antes citado, deberá:

a. Aportar Políticas contables relacionadas con la adopción de las normas internacionales de información financiera en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

b. Aportar una relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad de la concursada, soportada con los certificados de tradición y libertad y fotocopias de las tarjetas de propiedad de vehículos, si es del caso.

c. Atender lo señalado en el artículo 2.2.2.4.2.31., del Decreto 1074 del 2015, que requiere indicar en dicho inventario los bienes dados en garantía, clasificados en necesarios y no necesarios para el desarrollo de su actividad económica, con la correspondiente valoración reflejada en los estados financieros, acompañada del avalúo que soporta el registro contable. De igual manera, informará sobre los procesos de ejecución, cobro y mecanismos de pago directo, que cursen contra la deudora que afecten los bienes en garantía.

Sexto. Ordenar al deudor y a quien ejerza funciones de promotor, comunicar a todos los jueces y autoridades jurisdiccionales, a las fiduciarias, a los notarios y cámaras de comercio que tramiten procesos de ejecución, de ejecución de garantías, de jurisdicción coactiva y a todos los acreedores de la deudora, sin perjuicio de que se encuentren ejecutando su garantía por medio de mecanismo de pago directo lo siguiente:

a. El inicio del proceso de Reorganización. Para el efecto deberá transcribirse el aviso expedido por esta entidad.

b. La obligación que tienen de remitir a este Despacho, todos los procesos de ejecución o cobro que hayan comenzado con anterioridad a la fecha de inicio del proceso de Reorganización y advertir sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra el deudor, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 2006.

c. Que las medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos o de cobro coactivo que recaen sobre bienes distintos a los sujetos a registro, de los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, se levantarán por



GOBIERNO DE COLOMBIA

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (601) 2201000

Colombia



MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO



ministerio de la Ley, con la firmeza del presente auto.

d. En consecuencia, deberá entregar los dineros o bienes al deudor, incluso si el proceso ejecutivo o de cobro coactivo no se hubiere remitido para su incorporación en el proceso concursal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 772 de 2020.

e. Que, para la constitución o conversión de títulos de depósito judicial, a favor del proceso, deberá tener en cuenta el número de expediente que en el portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia sea asignado, el cual podrá ser consultado en la página web de la Entidad, a través del siguiente link <https://supersociedades.gov.co/web/nuestra-entidad/titulos-de-deposito-judicial>.

Séptimo. Ordenar al deudor que acredite ante este Despacho, dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha de notificación del presente auto, el cumplimiento de la anterior instrucción, adjuntando al memorial los soportes respectivos.

Octavo. Ordenar a quien ejerza funciones de promotor, que dentro del mes siguiente al inicio del proceso informe al juez del concurso el destino de los bienes desembargados en procesos ejecutivos o de cobro coactivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 772 de 2020, y presente informes periódicamente respecto de los bienes que se desembarguen en el curso del mismo. Esta misma información debe ser remitida al Despacho cada vez que se produzcan dichos desembargos.

Noveno. Ordenar a quien ejerza funciones de promotor que deberá presentar ante el juez del concurso, los reportes de que trata el capítulo IV de la Resolución 100-001027 de 24 de marzo de 2020 por medio de la cual se reglamenta el Decreto 065 de 2020, dentro de las oportunidades señaladas para tal fin.

Décimo. Ordenar a quien ejerza funciones de promotor que presente a este Despacho los proyectos de calificación y graduación de créditos y derechos de voto, con base en la información aportada por la deudora y demás documentos y elementos de prueba que aporten los interesados. Esta instrucción deberá ser atendida, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la fecha de ejecutoria del presente auto.

Dichos documentos deben ser radicados a través de los canales de radicación disponibles y señalados en la Resolución 100-001101 de 31 de marzo de 2020 y transmitirlos a través del software XBRL EXPRESS, seleccionando el Informe 32 A PE 10 Calificación y Graduación de Créditos y Derechos de Voto para Traslado, disponible en la página de Internet de la Superintendencia de Sociedades.

En los proyectos mencionados deben quedar incluidos los procesos ejecutivos incorporados y, en caso de existir acreedores garantizados con bienes muebles e inmuebles, les debe reconocer los créditos y asignar votos en los términos señalados en el inciso 5º artículo 50 de la Ley 1676 de 2006.

Se advierte que el registro en el sistema SIRFIN, deberá realizarse por la siguiente ruta de acceso:

<https://superwas.supersociedades.gov.co/ActualizacionDatosSociedades/login.jsp>,



GOBIERNO DE COLOMBIA

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (601) 2201000

Colombia



MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO



Para efectos de la transmisión del informe 32 A PE 10, deberá tenerse en cuenta que la fecha de corte corresponde al día anterior a la fecha del presente auto. El aplicativo XBRL EXPRESS se descarga desde la página de internet de la Superintendencia de Sociedades, accediendo al siguiente link:

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/informes_empresariales/Paginas/default.aspx

Parágrafo: Se advierte que, el proyecto de calificación y graduación de créditos y de determinación de derechos de voto quedará a disposición de los acreedores en el expediente del proceso.

El incumplimiento de la orden, dará lugar a la imposición de sanciones por parte del Juez del Concurso, según las facultades previstas en el numeral 5 del artículo 5 de la Ley 1116 de 2006.

Décimo primero. Advertir a quien ejerza funciones de promotor que, en virtud de lo señalado en el artículo 42 del Decreto 065 de 2020, el juez del concurso, podrá exigir la habilitación de un blog virtual con el propósito de darle publicidad al proceso, si así lo considera necesario para el debido cumplimiento de los fines del proceso.

Parágrafo. Advertir a quien ejerza funciones de promotor que, en virtud de las disposiciones señaladas, deberá agotar todos los esfuerzos para la pronta obtención de las direcciones de correo electrónico de los acreedores con el fin de remitirles las principales actuaciones del proceso a través de este medio, lo cual, en todo caso, no releva a los interesados de cumplir sus cargas y verificar directamente el expediente electrónico o físico, cuando ello resulte posible.

Décimo segundo. Advertir al deudor que, para efectos de presentar el acuerdo de reorganización, deberá diligenciar el "Informe 34" denominado "Síntesis del Acuerdo", el cual debe ser remitido vía Internet y aportado en forma impresa a este Despacho. El aplicativo se puede obtener en el portal de internet de la Superintendencia de Sociedades: <https://www.supersociedades.gov.co> ingresando por el vínculo software para el envío de la información. Para tal efecto, se deben seguir las instrucciones para descargar e instalar Storm User.

Décimo tercero. Ordenar a la deudora abstenerse de realizar, sin autorización de este Despacho, enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos o arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias ni, en general, adelantar operaciones societarias o contractuales que supongan erogaciones reales o potenciales a cargo de la sociedad, salvo por las excepciones contenidas en el Decreto 560 de 2020 y el Decreto 772 de 2020, según resulte aplicable.

Décimo cuarto. Ordenar a la deudora mantener a disposición de los acreedores y remitir de forma electrónica a esta Entidad, la información señalada en el artículo 19.5 de la Ley 1116 de 2006 en los términos de la Circular Externa 100-000005 de 8 de agosto de 2016. En la preparación de los estados financieros referidos en el presente numeral, los responsables deberán valorar la capacidad de la Entidad para continuar



GOBIERNO DE COLOMBIA

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (601) 2201000

Colombia



MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO



como empresa en funcionamiento (Decreto 2420 de 14 de diciembre de 2015 y NIA 570 incorporada en el Decreto 2132 de 22 de diciembre de 2016). Así mismo, el contador o revisor fiscal, según corresponda, deberá obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la idoneidad del uso que se haya dado sobre la hipótesis de empresa en funcionamiento para preparar los estados financieros, y determinar si existe alguna incertidumbre material con respecto a la capacidad del deudor para continuar como empresa en funcionamiento (NIA 570 incorporada en el Decreto 2132 de 22 de diciembre de 2016).

Décimo quinto. Ordenar a la deudora que, desde la notificación de este auto, deberá iniciar el trámite de depuración y/o actualización de deuda por aportes al sistema de seguridad social y, de ser el caos, los trámites tendientes a la obtención del concepto previo para la normalización pensional. Se previene al representante legal sobre la necesaria diligencia que debe observar en el cumplimiento de esta orden del Despacho, de la cual se hará seguimiento estricto.

Décimo sexto. Ordenar la inscripción de esta providencia en el Registro Mercantil del domicilio de la sociedad, en los términos previstos en el artículo 19.2 de la Ley 1116 de 2006.

Décimo séptimo. Decretar el embargo de los bienes sujetos a registro de propiedad de la sociedad concursada, con la advertencia que las medidas cautelares de naturaleza concursal prevalecen sobre las que se hayan decretado y practicado en otros procesos.

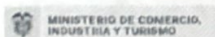
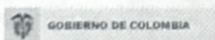
Décimo octavo. Fijar en el Secretaría Administrativa y Judicial de la Intendencia Regional de Cali, por el término de cinco (5) días, un aviso que informe acerca del inicio del proceso de Reorganización.

Décimo noveno. Ordenar a la Secretaría Administrativa y Judicial de la Intendencia Regional de Cali, remitir copia de esta providencia al Ministerio de Trabajo, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y a la Superintendencia que ejerza la vigilancia o control del deudor, para lo de su competencia.

Vigésimo. Ordenar a la Secretaría Administrativa y Judicial de la Intendencia Regional de Cali, expedir copias auténticas con constancia de ejecutoria de la presente providencia a la Cámara de Comercio del domicilio social de la deudora y demás autoridades que lo requieran.

Vigésimo primero. Ordenar a la Secretaría Administrativa y Judicial de la Intendencia Regional de Cali, la creación del número de expediente **76001919610102362090479**, que corresponde al proceso, en el portal web transaccional del Banco Agrario de Colombia, para efectos de la constitución de títulos de depósito judicial en el desarrollo del proceso, cuenta de depósitos judiciales número **760019196101**, a nombre de esta Entidad.

Vigésimo segundo. Advertir que de conformidad con el artículo 61 de la Ley 1116 de 2006, en caso de existencia de situaciones de subordinación o grupo empresarial, se presume que la situación de insolvencia es consecuencia de las actuaciones de la matriz o controlante, en virtud de la subordinación, en interés de esta o de cualquiera de sus subordinadas y en contra del beneficio de la sociedad en reorganización.



En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.

www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia



Vigésimo tercero. Advertir a las partes que las órdenes relacionadas con entrega de documentos físicos serán cumplidas por la Secretaría Administrativa y Judicial de la Intendencia Regional de Cali, de acuerdo con los protocolos establecidos por esta Entidad.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Carlos Andrés Arcila S.

Carlos Andres Arcila Salazar
Intendente Regional Cali

TRD: ACTUACIONES

Rad.
2023-01-014124


 GOBIERNO DE COLOMBIA

En la Superintendencia de Sociedades trabajamos para contar con empresas competitivas, productivas y perdurables y así generar más empresa, más empleo.
www.supersociedades.gov.co

webmaster@supersociedades.gov.co

Línea única de atención al ciudadano: 01-8000 - 11 43 10

Tel Bogotá: (601) 2201000
Colombia

 MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO



SEÑORES

**CENTRO DE CONCILIACION Y ABRITRAJE – CAMARA DE
COMERCIO BOGOTA**


E.S.D.

Ref: Amparo de pobreza

LUIS ERNESTO CHAVES MARTÍNEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.970.828 de Pasto, actuando como representante legal de la sociedad demandante V1501 S.A.S., con domicilio en la ciudad de Pasto, NIT 900.835.788-3, por el presente manifiesto bajo la gravedad de juramento que la sociedad demandante no se haya en capacidad de atender los gastos del proceso sin menos cabo de lo necesario para su subsistencia, situación que resulta evidente por la cuantía del asunto y la caución que ella implicaría teniendo en cuenta que en la demanda se solicitan medidas cautelares, así como por la expectativa de demanda ejecutiva en contra de la sociedad por la obligación a su cargo y que hasta el momento no ha podido cumplir a favor de banco Davivienda, hecho que también se menciona en el escrito de demanda.

Debido a lo anterior solicito que, conforme a los artículos 151 y s.s. del Código General del Proceso, se conceda el amparo de pobreza a favor de la sociedad V1501 S.A.S.

Atentamente,



LUIS ERNESTO CHAVES MARTÍNEZ

C.C. No.12.970.828 de Pasto



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



COD 75865

En la ciudad de Pasto, Departamento de Nariño, República de Colombia, el veinticuatro (24) de enero de dos mil veinticinco (2025), en la Notaría primera del (1) del Círculo de Pasto, compareció: LUIS ERNESTO CHAVES MARTINEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía / NUIP 0012970828 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.



75865-1

cde1954b99

24/01/2025 18:02:58

----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto - Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Esta Acta se asocia al documento que contiene la siguiente información: AMPARO DE POBREZA



MABEL MARTINEZ VARGAS

Notaria (1) del Círculo de Pasto, Departamento de Nariño

Consulte este documento en <https://notariid.notariasegura.com.co>

Número Único de Transacción: cde1954b99, 24/01/2025 18:03:15

ACTA 6

El 26 de febrero de 2025, el Tribunal Arbitral Convocado para dirimir las controversias surgidas entre **V1501 S.A.S.** como Parte Convocante, y **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.** y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO V1501**, representado por su vocera **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.**, como Parte Convocada, integrado por los doctores, **DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO**, Presidente, **GONZALO MÉNDEZ MORALES** y **JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ**, Árbitros, y **ANDREA ATUESTA ORTIZ**, Secretaria, realizó por medios virtuales la presente sesión con el fin de continuar el trámite del proceso arbitral. (Rad. 152220)

Se deja constancia de lo siguiente:

La audiencia se realizó sin presencia de las partes, como autoriza el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012.¹

A continuación, la secretaria rindió el siguiente informe:

1. El 23 de enero de 2025 se notificó a las partes el Auto 7.
2. El 6 de febrero de 2025, la Parte Convocante remitió un escrito en el que solicita amparo de pobreza y medida cautelar. Adjuntó a dicho escrito el Auto de la Superintendencia de Sociedades Regional Cali por el cual se admite una solicitud al proceso de reorganización de fecha 15 de febrero de 2023. Este correo fue remitido con copia al apoderado de la Parte Convocada.
3. El 12 de febrero de 2025, en los términos del artículo 15 de la Ley 1563 de 2012, se remitió a las partes una revelación sobrevenida de la Secretaria.
4. El 20 de febrero de 2025, el apoderado de Fiduciaria Davivienda S.A. remitió el escrito de contestación de la demanda, en el que formuló excepciones de mérito y solicitó el decreto y la práctica de pruebas. El correo electrónico mediante el cual se allegó la contestación de la demanda fue enviado con copia a los correos de la Parte Convocante.
5. El 20 de febrero de 2025, el apoderado de Fiduciaria Davivienda S.A. como vocera y administradora del Fideicomiso V1501, remitió el escrito de contestación de la

¹ El «tribunal en pleno realizará las audiencias que considere necesarias, con o sin participación de las partes. Las audiencias podrán realizarse por cualquier sistema que permita la comunicación de los participantes entre sí».

demanda, en el que formuló excepciones de mérito y solicitó el decreto y la práctica de pruebas. El correo electrónico mediante el cual se allegó la contestación de la demanda fue enviado con copia a los correos de la Parte Convocante.

6. El 20 de febrero de 2025, la doctora Diana Rivera Andrade, en su condición de apoderada de Banco Davivienda S.A., remitió un correo electrónico mediante el cual allega documento de contestación de la demanda y manifiesta intervenir como litisconsorte cuasinecesario de la parte demandada.
7. Se incorporó al expediente digital el Cuaderno de Medidas Cautelares, en el que se encuentran las providencias que fueron notificadas a la parte Convocante.

Fin del informe.

El Tribunal profirió el siguiente

AUTO 8

26 de febrero de 2025

Procede el Tribunal a resolver la solicitud de amparo de pobreza y medidas cautelares presentada por la Parte Convocante, para lo cual considera lo siguiente:

1. La Parte Convocante presentó solicitud de amparo de pobreza y medidas cautelares en los siguientes términos:

“Dentro del trámite de la referencia el Tribunal a través de auto No. 3 de fecha 19 de noviembre de 2024, negó el amparo de pobreza a la sociedad demandante. Razón por la cual se anexa al presente escrito la decisión de la superintendencia de sociedades que admite a la sociedad demandante a trámite de Insolvencia y está acreditado en el proceso que dentro de las obligaciones admitidos insolvencia está la cobrada por el banco Davivienda quien también es parte en el presente proceso. Con la prueba suministrada se cumple la exigencia que permite a las personas jurídicas acceder al trámite al beneficio negado.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos comedidamente el decreto de medidas cautelares, correspondientes a la inscripción de la demanda la inscripción de la demanda a los folios de matrícula inmobiliaria 240-290482 LOCAL ESPECIALIZADO HOTEL”.

2. Adjuntó a la solicitud el Auto de la Superintendencia de Sociedades Regional Cali por el cual se admitió a la sociedad Convocante al proceso de reorganización, el cual tiene fecha 15 de febrero de 2023.

3. Mediante providencia del 19 de noviembre de 2024 (Auto No. 3), el Tribunal negó el amparo de pobreza que había sido solicitado por la Convocante, con fundamento, entre otras, en las siguientes consideraciones:

“El representante legal de la Convocante fundamenta su petición en que ‘la cuantía del asunto y la caución que ella implicaría teniendo en cuenta que en la demanda se solicitan medidas cautelares, así como por la expectativa de demanda ejecutiva en contra de la sociedad por la obligación a su cargo y que hasta el momento no ha podido cumplir a favor de banco Davivienda’. Estas manifestaciones no acreditan de forma objetiva la falta de capacidad financiera de la sociedad para atender los gastos del proceso y, mucho menos, que la atención de estos pondría en vilo su supervivencia. La cuantía del asunto y la caución a otorgarse ante la solicitud de una medida cautelar, no constituyen circunstancias objetivas que demuestren la falta de capacidad financiera de la sociedad, y mucho menos que está en riesgo la sostenibilidad financiera de la misma. En el mismo sentido, la expectativa de una posible demanda ejecutiva tampoco acredita que la sociedad se encuentre en una situación de extrema gravedad financiera que amenace su permanencia.

(...)

Destaca el Tribunal que no se ha allegado prueba alguna que acredite el cumplimiento de los requisitos necesarios para el otorgamiento de un amparo de pobreza.”

4. Examinada la solicitud que ahora presenta la Parte Convocante, encuentra el Tribunal que la circunstancia aducida en esta oportunidad como fundamento de la solicitud, esto es, que la sociedad Convocante fue admitida al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006, no demuestra los presupuestos para conceder el amparo de pobreza solicitado.
5. En primer lugar, se observa que se trata de una circunstancia conocida por la peticionaria desde febrero del año 2023, esto es, con antelación a la presentación de la demanda, y con ello, a la presentación de la primera solicitud de amparo de pobreza que fue resulta mediante providencia notificada a las partes el 20 de noviembre de 2024.
6. En segundo lugar advierte el Tribunal, como se estableció en el citado Auto No. 3, que el amparo de pobreza exige una acreditación concreta y objetiva de la incapacidad económica del solicitante para asumir los costos del proceso, conforme a los criterios establecidos en la normativa aplicable. La admisión a proceso de reorganización, si bien puede ser un indicio de dificultades financieras, no implica automáticamente la imposibilidad de sufragar los gastos procesales ni que ello ponga

en riesgo su supervivencia. Le corresponde al peticionario, demostrar con adecuados y objetivos elementos probatorios que la sociedad se encuentre en una situación de extrema gravedad financiera, para lo cual no resulta suficiente simplemente con la indicación que la sociedad fue admitida al proceso de reorganización regulado por la ley 1116 de 2006. El hecho de que una sociedad se encuentre en proceso de reorganización no implica *per se*, que no tenga capacidad financiera para atender los gastos del proceso y, mucho menos, que la atención de estos pondría en vilo su supervivencia. Por el contrario, la ley determina que *“El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos”* (artículo 1º de la Ley 1116 de 2006). Es decir, se trata de un proceso concursal que presupone, por definición, la viabilidad del deudor en dificultades.

7. En este sentido se pronunció la Corte Suprema de Justicia indicando que:

“De todas maneras, el Juzgado Veintitrés Civil del Circuito de Bogotá no podía limitar la concesión del amparo de pobreza a que para la fecha de la solicitud se encontrara admitido el proceso de reorganización de la peticionaria, porque así no lo establece la ley ni la jurisprudencia y no es una prueba que, por sí sola, de certeza acerca de la capacidad económica de la sociedad, aunque sí es una prueba que debe analizarse en armonía con las demás recaudadas.

Es más, pese a la existencia del trámite de insolvencia, podría establecerse que la empresa estaría en capacidad de atender las cauciones o gastos del proceso, «pues es bien sabido que en los procesos de reorganización y liquidación empresarial se prevén mecanismos para atender las erogaciones que se encuentren en curso, amén de la garantía de la continuidad del ente económico» (AC2515-2017), pero tal averiguación corresponde al juez natural en el cumplimiento de sus competencias.” (STC8441-2023, MP Martha Patricia Guzmán Álvarez)

8. En consecuencia, la simple admisión a un proceso de insolvencia no es prueba determinante para conceder el amparo de pobreza. La insolvencia por sí misma no implica necesariamente una incapacidad de pago, pues en los procesos de reorganización se prevén mecanismos para atender las obligaciones en curso y garantizar la continuidad del ente económico. Mucho menos implica como lo hemos advertido, la ausencia de viabilidad de la persona en proceso de insolvencia. Ahora bien, analizada estas circunstancias en conjunto con los hechos aducidos por la Convocante en las dos solicitudes de amparo de pobreza que ha presentado, no encuentra el Tribunal que se encuentre debidamente acreditada la criticidad de la situación financiera de la empresa Convocante, y tampoco que la atención de los gastos del proceso pondría en vilo su propia subsistencia. Del hecho aducido por la

Convocante relativo a que en el proceso de reorganización se reconocieron obligaciones, como la del Banco Davivienda, no se deriva que se encuentre acreditada una crítica situación financiera de la sociedad que le impide atender los gastos del proceso sin poner en vilo su propia supervivencia.

9. En conclusión, si bien es cierto que la Convocante se encuentra en un proceso de reorganización, lo que se ha acreditado, no constituye un motivo suficiente para fundamentar el amparo de pobreza, por lo que se negará la solicitud presentada.
10. Por último, en cuanto a la solicitud de medida cautelar que fue presentada por la Convocante, el Tribunal se pronunció en providencia del 26 de diciembre de 2024, notificada a la Convocante el 27 de diciembre de 2024. Sin embargo, transcurrido el plazo concedido a la Parte Convocante para que prestara la caución ordenada por el Tribunal, ésta no allegó prueba alguna de que se hubiese prestado dicha caución, por lo que mediante providencia del 22 de enero de 2025, notificada a la Convocante el 23 de enero de 2025, el Tribunal negó dicha medida cautelar. En consecuencia, la solicitud de medida cautelar fue resuelta por el Tribunal en dichas providencias.

Por lo expuesto el Tribunal

RESUELVE

1. Negar la solicitud de amparo de pobreza presentada por la Parte Convocante mediante escrito del pasado 6 de febrero.
2. En cuanto a la medida cautelar solicitada por la Convocante, estar a lo dispuesto en las providencias del 26 de diciembre de 2024 y 22 de enero de 2025.
3. Por Secretaría notifíquese esta providencia a las partes de este proceso en los términos del artículo 2.5 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El Tribunal profirió el siguiente

AUTO 9

26 de febrero de 2025

En atención a la presentación de las contestaciones de demanda a las que se hace referencia en el informe secretarial, el Tribunal

RESUELVE

1. Tener por contestada oportunamente la demanda por parte de las Convocadas Fiduciaria Davivienda S.A. y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso V1501.
2. Advertir a la Convocante que toda vez que los escritos de contestación de la demanda presentados por Fiduciaria Davivienda S.A. y el Patrimonio Autónomo Fideicomiso V1501 fueron enviados con copia a la Parte Convocante, el traslado previsto en el numeral segundo del artículo 2.35 del Reglamento de Arbitraje Nacional del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá de las excepciones de mérito formuladas en estas contestaciones de demanda, se está surtiendo de manera automática en los términos del parágrafo del artículo 9º de la ley 2213 de 2022.
3. El Tribunal se pronunciará en providencia posterior sobre la solicitud de vinculación del Banco Davivienda S.A. a este proceso en calidad de litisconsorte cuasinecesario y la contestación a la demanda presentada por esta.
4. Por Secretaría notifíquese esta providencia a las partes de este proceso en los términos del artículo 2.5 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión.

Aprobada por medios virtuales

DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO

Presidente

Aprobada por medios virtuales

GONZALO MÉNDEZ MORALES

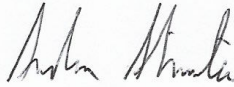
Árbitro

Aprobada por medios virtuales

JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ

Árbitro

La suscrita Secretaria del Tribunal Arbitral deja constancia que los Árbitros intervinieron en la audiencia, deliberaron y aprobaron las decisiones que esta Acta contiene, a través de los medios electrónicos autorizados por el artículo 2.13 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y 23 de la Ley 1563 de 2012.



ANDREA ATUESTA ORTIZ
Secretaria

Doctor
GONZALO MENDEZ MORALES
Presidente y demás miembros
Tribunal de Arbitramento.
Cámara de Comercio de Bogotá
Ciudad.

Rad: 152220
Dte: Sociedad V1501 SAS
Ddo: Fiduciaria Davivienda S.A. y otros.

En mi condición de apoderado de la parte demandante dentro del trámite de la referencia, me permito interponer recurso de reposición frente a la decisión adoptada mediante auto No. 8 de 26 de febrero de 2025, notificada el 27 de febrero a través de correo electrónico.

El argumento central de la decisión recurrida afirma que, la parte que solicita el amparo, no probó de manera adecuada la incapacidad para atender los costos del arbitraje. Afirma la providencia: “...analizada estas circunstancias en conjunto con los hechos aducidos por la Convocante en las dos solicitudes de amparo de pobreza que ha presentado, no encuentra el Tribunal que se encuentre debidamente acreditada la criticidad de la situación financiera de la empresa Convocante, y tampoco que la atención de los gastos del proceso pondría en vilo su propia subsistencia”¹.

En sentir del suscrito recurrente el H. Tribunal, con la exigencia de demostrar específicamente la situación económica a través de elementos demostrativos, está imponiendo una carga probatoria que la ley no contiene, por las siguientes razones:

El artículo 13 de la ley arbitral en Colombia remite para sus requisitos al código de procedimiento civil, cuando afirma que se concederá “...en los mismos términos del Código de Procedimiento Civil...”².

El código de procedimiento civil regulaba en el artículo 161 los requisitos para el amparo de pobreza, norma que con leves modificaciones de redacción se recogió en el actual artículo 152 del código general del proceso.

De la lectura de la norma es claro que el único requisito probatorio exigido es el juramento, que como prueba, es tratado en el artículo 207 del código general del proceso, como juramento deferido por ley.

¹ Pagina 4, Numeral 8 considerandos de la decisión.

² Ley 1563 de 2012, artículo 13

Entonces, la ley exige un solo requisito o prueba, el juramento, que podrá ser desvirtuado por la contraparte aportando pruebas de que la capacidad económica existe o que las circunstancias que llevaron a solicitarlo y decretarlo cesaron, como lo señala el artículo 158 del Código General del Proceso.

El Tribunal, al negar lo pedido, no explica el fundamento de esta inversión de la carga de prueba, lo que en criterio del suscrito recurrente, contradice norma expresa procesal, que por su carácter de orden público es de obligatorio cumplimiento.

El respaldo de la decisión se encuentra en una cita jurisprudencial, que no es pertinente a lo tratado y que encuentra su opuesto en la siguiente decisión de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que interpretando la norma del Código General del Proceso, que allí también es aplicable, además de referirse al punto en concreto y con los argumentos que aquí recogemos expuso:

«[...] al realizar una nueva revisión sobre el particular, esta Sala de Casación advirtió la necesidad de replantear el criterio sobre la procedencia del amparo, toda vez que conforme a lo establecido en el artículo 151 y 152 del Código General del Proceso, en los procesos laborales, en virtud del principio de integración contenido en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas que por ley debe alimentos, salvo cuando se pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso. **Frente a lo anterior, se advierte que con dichas normativas se quiere proteger el acceso a la administración de justicia para quienes carecen de medios para afrontar un caso ante la justicia, sin que existan requisitos para ello, pues como la norma lo aduce en su inciso 2 del artículo 152 ibídem que, “el solicitante deberá afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el artículo precedente”, esto es, en el 151 del mismo texto normativo.**

Así las cosas, teniendo en cuenta la nueva línea de pensamiento, la Sala en proveído CSJ AL2871-2020, identificó dos requisitos exigibles para presentar la solicitud de amparo de pobreza: (i) Que la solicitud se presente bajo la gravedad de juramento, y (ii) Que la solicitud se formule por la persona que se halla en la situación que describe la norma. En ese mismo sentido, señaló que:

“[N]o resulta actualmente sostenible que se exija el trámite de un incidente para conceder el amparo de pobreza en el proceso laboral a diferencia de los demás asuntos que se rigen por el estatuto adjetivo civil, pues así no lo previó el legislador ni se encuentran razones atendibles para que deba surtirse, por el contrario, imponerlo

exclusivamente en esta clase de juicios constituye una carga gravosa únicamente para quien acude a esta especialidad, pese a que por su naturaleza debe estar dotada de especiales garantías por cuanto su objeto es el trabajo humano, y representa un trato desigual para quienes se encuentran ante una situación de vulnerabilidad por carecer de capacidad económica para atender los gastos de un proceso, criterio odioso pues nadie elije encontrarse en tales condiciones”³.

Así las cosas, al negar el amparo de pobreza indirectamente el Tribunal está negando el acceso a la administración de justicia de la sociedad que represento, quien desde la presentación de la demanda ante la Justicia Ordinaria manifestó no contar con recursos para atender a Tribunal Arbitral, razón por la cual, conociendo la cláusula compromisoria, hizo caso omiso de ella y acudió a la Justicia Ordinaria.

Notificada Davivienda propuso excepción previa y en respuesta a la misma se expresaron las mismas razones de incapacidad económica que ahora se argumentan.

Si después de este trámite se niega, la parte recurrirá a las acciones constitucionales para garantizar su acceso a la justicia y si finalmente la razón no le es concedida, posiblemente se abstendrá de cubrir las expensas, dando vueltas innecesarias para obtener una decisión que resuelva sus pretensiones, en situación que desde hace más de dos años se ha advertido a todo nivel.

Los costos de un trámite arbitral en una sociedad que atraviesa por un proceso de insolvencia no son costos menores, más si se tiene en cuenta que la empresa presta servicios de hotelería en una zona afectada por fenómenos de violencia, con acceso restringido a un departamento bloqueado permanentemente por los indígenas del Cauca, donde el aeropuerto se cierra varias veces al mes por temas climáticos y donde, al presentar el recurso, se presenta bloqueo de indígenas en la vía al Ecuador.

Se cae de su peso, por ser hecho notorio, que la crisis de la empresa encuentra un respaldo más que demostrable, que será objeto de prueba en el evento que corresponda, pero que no puede pretenderse un trámite probatorio por anticipado, cuando nada prevé la ley sobre el particular.

Por las razones expuestas, solicito reponer la providencia impugnada y conceder el amparo solicitado.

³ Auto de 15 de marzo de 2023, providencia AL 535-2023, M.P. Dr. FERNANDO CASTILLO CADENA.

Atentamente,

IVAN FERNANDO ZARAMA CONCHA

T.P. No. 50.358 del C.S. de la J.

ACTA 9

El 11 de abril de 2025, el Tribunal Arbitral Convocado para dirimir las controversias surgidas entre **V1501 S.A.S.** como Parte Convocante, y **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.** y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO V1501**, representado por su vocera **FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A.**, como Parte Convocada, integrado por los doctores, **DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO**, Presidente, **GONZALO MÉNDEZ MORALES** y **JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ**, Árbitros, y **ANDREA ATUESTA ORTIZ**, Secretaria, realizó por medios virtuales la presente sesión con el fin de continuar el trámite del proceso arbitral. (Rad. 152220)

Se deja constancia de lo siguiente:

La audiencia se realizó sin presencia de las partes, como autoriza el artículo 31 de la Ley 1563 de 2012.¹

A continuación, la secretaria rindió el siguiente informe:

El 7 de abril de 2025 se notificó a las partes y a la apoderada del Banco Davivienda los Autos 11 y 12.

Fin del informe.

El Tribunal profirió el siguiente

AUTO 13

11 de abril de 2025

Procede el Tribunal a resolver el recurso de reposición formulado por la Parte Convocante contra el Auto 8 del 26 de febrero de 2025, mediante el cual se negó la solicitud de amparo de pobreza presentada por la Convocante, para lo cual considera lo siguiente:

¹ El «tribunal en pleno realizará las audiencias que considere necesarias, con o sin participación de las partes. Las audiencias podrán realizarse por cualquier sistema que permita la comunicación de los participantes entre sí».

1. La Parte Convocante solicita se reponga el Auto 8 del pasado 26 de febrero, con fundamento en los siguientes argumentos:
 - a. Señala el recurrente que el único requisito probatorio exigido por la ley para que se conceda el amparo de pobreza es el juramento, *“que podrá ser desvirtuado por la contraparte aportando pruebas de que la capacidad económica existe o que las circunstancias que llevaron a solicitarlo y decretarlo cesaron, como lo señala el artículo 158 del Código General del Proceso”*.
 - b. Agrega que el Tribunal al negarlo no explica la inversión de la carga de la prueba, y cita un aparte de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia d Casación Laboral.
 - c. Indica que al negar el amparo de pobreza indirectamente el Tribunal está negando el acceso a la administración de justicia, y que los costos de un trámite arbitral en una sociedad que atraviesa por un proceso de insolvencia no son costos menores.
2. Estudiado el recurso de reposición formulado por la Parte Convocada, el Tribunal observa que no hay lugar a reponer el Auto 8, con fundamento en las siguientes consideraciones:
 - a. El artículo 151 del CGP sobre la procedencia del amparo de pobreza dispone: *“Se concederá el amparo de pobreza a la persona que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso a título oneroso”*.
 - b. Esta norma en principio está consagrada para las personas naturales, pues son solamente estas quienes en determinadas circunstancias pueden estar obligadas a pagar a alimentos.
 - c. La posibilidad de conceder amparo de pobreza a las personas jurídicas ha tenido desarrollo jurisprudencial. En este sentido, como se dispuso en el Auto 3 del 19 de noviembre de 2024 y se reitera en esta ocasión, si bien la jurisprudencia ha establecido que el amparo de pobreza también podría resultar aplicable en el caso de las personas jurídicas, su procedencia es excepcional y debe

encontrarse acreditada la criticidad de la situación financiera en la que se encuentra la sociedad. La jurisprudencia ha sido clara y reiterativa, en el sentido que cuando el peticionario del amparo de pobreza es una persona jurídica, la procedencia de dicha solicitud es excepcional y la carga probatoria es mayor.

- d. El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia se han pronunciado en este sentido, en pronunciamientos que fueron citados en el Auto 3, y es del caso reiterar para resolver el recurso presentado:

La Corte Suprema de Justicia ha indicado que:

*“[p]or excepción, la jurisprudencia ha admitido que el amparo de pobreza abrace a las personas morales, siempre que «se encuentren en una crítica situación financiera tal que, por padecerla, verdaderamente no se hallan en condiciones de atender a los gastos de un proceso, sin dejar en vilo **su pervivencia** o sin precipitar **su definitiva extinción en forma estruendosa** desde el punto de vista económico» (AC166, 1 ag. 2003, exp. n° 00045)”².*

Añade la Corte Suprema de Justicia:

*“En este caso, el peticionario tiene una mayor carga argumentativa y demostrativa, pues **deberá evidenciar que el ente empresarial padece serias dificultades de capital, al punto que, de sufragar las expensas connaturales a la causal, lo llevará a la disolución y liquidación, o a la imposibilidad de atender las «necesidades inherentes a su existencia misma,** como en efecto acontece, entre otros conceptos, con las cargas laborales, locativas y los importes sociales, cuyos montos pueden afectar inclusive a las personas naturales que la integran» (idem).*

*De allí que **esta Corte haya considerado razonable la negativa al amparo de pobreza, cuando el interesado omita arrimar las pruebas que permitan demostrar la difícil situación patrimonial***

² Corte Suprema de Justicia. Auto del 24 de abril de 2017. AC2515-2017. Radicación n° 11001-31-03-017-2015-00427-01.

de la sociedad, bajo la premisa que su procedencia resulta extraordinaria (STC558, 25 en. 2017, rad. n° 2017-00014-00).

*Tal análisis deberá hacerse caso por caso, «perfilando un símil entre la subsistencia que atañe con la persona humana, y la permanencia de las personas jurídicas, bien para superar o evitar en su caso la **extinción definitiva** de acuerdo con la función social que cumplen, o bien para disminuir los efectos que de su extinción puedan derivarse» (AC166, 1 ag. 2003, exp. n° 00045).»³ (Resalta el Tribunal)*

En el mismo sentido el Consejo de Estado ha establecido:

*“El amparo de pobreza es una figura del ordenamiento procesal civil regulada en los artículos 160 a 167 del C.P.C y que resulta aplicable en materia de lo contencioso administrativo por remisión del artículo 267 del C.C.A. Con dicha figura se busca garantizar no sólo la igualdad real entre las partes, sino el derecho de acceso a la administración de justicia de las personas que no cuentan con los recursos necesarios para asumir los gastos que surgen en el trámite de un proceso judicial. El artículo 160 del C.P.C. establece que se concederá amparo de pobreza a la persona que no se encuentre en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para **su propia existencia** y la de las personas a las que, por ley, debe alimentos. Una lectura inicial de tal artículo llevaría a concluir que el beneficio del amparo de pobreza está previsto únicamente para las personas naturales. No obstante, esta Sala ha admitido la procedencia del amparo de pobreza para las personas jurídicas, cuya situación económica les impida cumplir con las cargas procesales de tipo económico. Esas dificultades económicas, en todo caso, deben ser graves al punto que, de cumplirse la carga procesal pecuniaria, se afectaría o se pondría en **grave riesgo** la sostenibilidad financiera de la empresa. Esto es, los simples apuros económicos no son per se razón suficiente para conceder el beneficio del amparo de pobreza a las personas jurídicas, pues sólo las situaciones de **extrema gravedad***

³ Corte Suprema de Justicia. Auto del 24 de abril de 2017. AC2515-2017. Radicación n° 11001-31-03-017-2015-00427-01.

económica debidamente acreditadas hacen procedente dicho beneficio a favor de las personas jurídicas. De ahí que a la persona jurídica le corresponda probar, por medio de los estados financieros actualizados, que se encuentra en una crítica situación económica y que, por ende, no puede cumplir con las cargas procesales pecuniarias, porque se vería afectada **de manera grave** la **sostenibilidad** financiera de la compañía. Al juez, por su parte, le compete examinar las pruebas con las que se pretenda demostrar la difícil condición económica de la empresa y determinar si existe una situación de **extrema necesidad**, que le **impida** a la persona jurídica cumplir con las cargas procesales monetarias.”⁴ (Resalta el Tribunal)

- e. El auto citado por el recurrente como fundamento de su solicitud no resulta aplicable al caso que ocupa al Tribunal, pues el análisis que en dicha providencia se hace corresponde a la solicitud de amparo de pobreza presentada por Olga Lucía Aguilar Alonso, en su calidad de **persona natural**, situación que, como se ha expuesto, y lo ha desarrollado la jurisprudencia, **no es equiparable a la de las personas jurídicas**, quienes deben acreditar la criticidad de la situación financiera en la que se encuentra la sociedad, en los términos que se han descritos. En el caso de las personas jurídicas, la procedencia del amparo de pobreza es excepcional, por lo que no basta con que se afirme bajo juramento que se encuentre bajo las circunstancias indicadas en el artículo 151 del CGP, resulta necesario además que se allegue la evidencia que acredite que la sociedad se encuentra en una situación financiera crítica **“al punto que, de sufragar las expensas connaturales a la causal, lo llevará a la disolución y liquidación, o a la imposibilidad de atender las «necesidades inherentes a su existencia misma»”**⁵.
- f. Incluso, la Corte Constitucional, en Sentencia T-339 de 2018, que también fue citada en el Auto 3, se refirió a los presupuestos mínimos para determinar la procedencia del amparo de pobreza consagrados en los artículos 151 y subsiguiente del CGP, y concluyó que **“no siempre bastaba con la declaración juramentada de estar en una situación económica precaria”**, sino que el juez debe

⁴ Consejo De Estado. C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenás. 5 de mayo de 2011. Radicación número: 05001-23-31-000-2006-02221-01(18169).

⁵ Corte Suprema de Justicia. Auto del 24 de abril de 2017. AC2515-2017. Radicación n° 11001-31-03-017-2015-00427-01.

contar un parámetro objetivo para determinar si tenía una justificación válida. Al respecto indicó la Corte Constitucional:

“En primer lugar, debe presentarse la solicitud de amparo de pobreza de manera personal, afirmando bajo juramento que está en las condiciones previstas en el artículo 151 del Código General del Proceso. En otras palabras, la persona interesada debe presentar una petición formal y juramentada ante el juez competente.

(...)

*En segundo término, este beneficio no puede otorgarse a todas las personas que de manera indiscriminada lo soliciten, sino **únicamente a aquellas que reúnan objetivamente las condiciones para su reconocimiento**, a saber, que **soliciten de forma... motivada** el amparo, y **acrediten la situación socioeconómica que lo hace procedente**.*

*Esta circunstancia fue particularmente analizada en la Sentencia T-114 de 2007, momento en el cual la Corte conoció una acción de tutela en donde se alegaba la vulneración de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia porque el juez ordinario decidió denegar el amparo de pobreza. En dicho fallo se negó el recurso de amparo al estimar que la decisión judicial adoptada por el fallador, en el sentido de no conceder la institución procesal, no configuraba una vulneración de tales derechos fundamentales, pues objetivamente no se advertía que las accionantes estuvieran en las condiciones previstas en el Estatuto Procesal de la época. **Para llegar a esa conclusión, el Tribunal dejó claro que no siempre bastaba con la declaración juramentada de estar en una situación económica precaria, sino que el juez competente, al momento de examinar la procedencia de esta figura, debía contar con un ‘parámetro objetivo’ para determinar si, conforme con la situación fáctica presentada, dicha otorgamiento tenía una justificación válida.***

*Ahora, habiendo quedado claro que esta institución procesal tiene fundamento constitucional y que la misma **requiere para su***

procedencia la demostración de ciertos presupuestos fácticos, es conveniente precisar –para responder el problema jurídico planteado- los efectos del reconocimiento del amparo de pobreza, en especial, respecto de la prueba decretada de forma oficiosa”.
(negrilla y subrayado fuera del texto original)

- g. Por las razones expuestas observa el Tribunal que no hay fundamento para revocar la providencia recurrida pues, se reitera, le corresponde al peticionario demostrar con adecuados y objetivos elementos probatorios que la sociedad se encuentre en una situación que cumple los requisitos exigidos, para lo cual no resulta suficiente simplemente con la indicación que la sociedad fue admitida al proceso de reorganización regulado por la ley 1116 de 2006.

En consecuencia, el Tribunal

RESUELVE

1. No reponer el Auto 8 del 11 de febrero de 2025.
2. Por Secretaría notifíquese esta providencia a las partes de este proceso, en los términos del artículo 2.5 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

A continuación el Tribunal profirió el siguiente

AUTO 14

11 de abril de 2025

Para darle continuidad al trámite, el Tribunal

RESUELVE

1. Fijar el **29 de abril de 2025 a las 3:30 p.m.** para llevar a cabo la próxima audiencia del Tribunal, actuación en la cual se fijarán los honorarios y gastos correspondientes a este Arbitraje, salvo que las partes soliciten de común acuerdo (numeral 2.37 del Reglamento de Procedimiento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá) la realización de la audiencia de conciliación prevista en el artículo 24 de la Ley 1563 de 2012, en cuyo caso tendrá lugar esta última audiencia, seguida, en caso de fracasar la conciliación, de la antedicha fijación de honorarios y gastos. Esta audiencia se efectuará a través de medios virtuales. Para el efecto, el Centro de Arbitraje y/o la Secretaría remitirán a los correos registrados las instrucciones de conexión.
2. Por Secretaría notifíquese esta providencia a las partes de este proceso, en los términos del artículo 2.5 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión.

Aprobada por medios virtuales

DANIEL RODRÍGUEZ BRAVO

Presidente

Aprobada por medios virtuales

GONZALO MÉNDEZ MORALES


Árbitro

Aprobada por medios virtuales

JORGE GABINO PINZÓN SÁNCHEZ

Árbitro

La suscrita Secretaria del Tribunal Arbitral deja constancia que los Árbitros intervinieron en la audiencia, deliberaron y aprobaron las decisiones que esta Acta contiene, a través de los medios electrónicos autorizados por el artículo 2.13 del Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y 23 de la Ley 1563 de 2012.



ANDREA ATUESTA ORTIZ

Secretaria